MATERIA MERCANTIL

JUZGADO VIGÉSIMO DE LO CIVIL DE CUANTÍA MENOR

JUEZ

MARÍA TERESA RINCÓN ANAYA

Sentencia definitiva dictada en juicio ejecutivo mercantil.

SUMARIO: PAGARÉ, COBRO DE INTERESES SUPERIOR A LAS TASAS FIJADAS POR LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO. ELEMENTOS DE LA REVISIÓN OFICIOSA FUNDADA EN LA OBLIGACIÓN DE VIGILAR LA APLICACIÓN DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. Para precisar si se actualiza o no el fenómeno usurario de cobro de intereses, deben tomarse en cuenta las particularidades del caso, así como las circunstancias económicas que puedan influir en el asunto; luego, si la pretensión se funda en un pagaré en el que se estableció un monto de pago, fecha de vencimiento, además de un pago de interés moratorio, es necesario tomar en cuenta para la condena de intereses, los diversos reportes con tablas de interés bancario, publicadas por el Banco de México en su portal de Internet. Dicho órgano de gobierno presenta los indicadores básicos sobre tasas de interés y comisiones en el mercado de las tarjetas de crédito, ponderándose aquellos datos que abarcan la tasa efectiva promedio estimada en el año en que se suscribió el pagaré exhibido como base de la acción, así como el CAT (Costo Anual Total). Este último es un indicador del costo total del financiamiento aplicable a todo tipo de crédito, con el cual es posible comparar el costo financiero entre créditos, que incluye el monto del crédito, intereses ordinarios, impuesto al valor

agregado, comisiones, gastos, primas de seguros requeridas, amortizaciones de principal, descuentos, bonificaciones pactadas en el contrato, y cualquier otro cargo que deba pagar el cliente al momento de contratar el crédito y durante su vigencia, incluyendo la diferencia entre el precio al contado de un bien y su precio a crédito, lo cual se expresa como el porcentaje anual, según lo establece el Banco de México. Lo anterior, con la finalidad de advertir si la variación del índice inflacionario durante la vigencia del crédito y la tasa mensual promedio resultan mucho menores a los intereses convenidos, y en caso de evidenciarse una desproporción en el pacto de intereses y las tasas de interés anualizadas vigentes en el sistema financiero mexicano, es posible determinar prudencialmente al momento de dictar el fallo definitivo, la reducción de la tasa de interés, cuando su resultado sea notoriamente excesivo, ello a fin de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las partes que se encuentran contenidos en nuestra Constitución Política, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

México, Distrito Federal, tres de octubre del año dos mil catorce.

Vistos. Para resolver en definitiva los autos del juicio ejecutivo mercantil, seguido por RAÚL, en contra de MARÍA DE LOS ÁNGELES, en el expediente ***/2014; y

RESULTANDO:

1. Que por escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con fecha catorce de mayo del año dos mil catorce, compareció, por su propio derecho, en términos del endoso en propiedad que obra al reverso del pagaré exhibido como base de acción, el C. RAÚL a demandar de MARÍA DE LOS ÁNGELES, el pago de las siguientes prestaciones:

A) El pago de la cantidad de \$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M. N., por concepto de suerte principal del documento que se presenta como base de la acción al presente juicio (*sic*);

B) El pago de los intereses moratorios generados, más los que se sigan generando hasta el pago total del adeudo a razón del 10% (diez por ciento) mensual;

El pago de los gastos y costas que este juicio origine (*sic*).

Fundándose para tal efecto en las consideraciones de hecho y de derecho contenidas en el cuerpo de su demanda, las cuales se tienen por reproducidas en todas y cada una de sus partes, como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y para todos los efectos legales a que haya lugar.

2. Admitida a trámite la demanda interpuesta, por auto de fecha dieciséis de mayo del año dos mil catorce (fojas 3 a 6), se ordenó emplazar a la parte demandada, requiriéndole el pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, tal y como se desprende de la diligencia de fecha ocho de julio del año dos mil catorce (fojas 10 y 11), en la que se emplazó a juicio a la parte demandada, no realizando el pago de las prestaciones reclamadas, por lo que, practicada la diligencia conforme a lo que disponen los artículos 1392 a 1396 del Código de Comercio, y habiendo sido debidamente emplazada la parte demandada, no realizó el pago de la cantidad adeudada, dando contestación a la demanda incoada en su contra, mediante escrito presentado ante la oficialía de partes de este juzgado, con fecha seis de agosto del año dos mil catorce (fojas 16 a 20), escrito que se tiene por reproducido como si a la letra se encontrara inserto en obvio de repeticiones innecesarias.

3. Contestada la demanda, se dio vista a la parte actora con las excepciones opuestas, y una vez admitidas y desahogadas las pruebas en la audiencia respectiva, cerrada la instrucción y agotado el período de

alegatos, se citó a las partes para oír sentencia definitiva, la cual se dicta al tenor de los siguientes

CONSIDERANDOS:

I. Que este juzgado es competente para resolver sobre la presente controversia con fundamento en lo establecido en los artículos 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75, 1090, 1092, 1094 y 1104 del Código de Comercio, así como el 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

II. Que la vía ejecutiva mercantil intentada por la parte actora, en virtud de que se basa en un título ejecutivo mercantil de los denominados “pagaré”, que reúne los requisitos que dispone el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y con base en este numeral y en lo dispuesto por el artículo 167 de la misma ley, así como en lo dispuesto por el artículo 1391 del Código de Comercio, ha resultado procedente.

III. Que atendiendo a que las partes deben asumir la carga probatoria de los hechos constitutivos de sus pretensiones y que el artículo 1194 del Código de Comercio, de conformidad con lo anterior, establece que el actor está obligado a probar su acción y el reo sus excepciones, la suscrita debe señalar, que en el presente asunto resulta procedente la acción ejecutiva mercantil ejercitada por la parte actora, ya que como se señaló con anterioridad, la misma se funda en un documento de los denominados “pagaré”, que anexa a su escrito inicial de demanda y que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1391, fracción IV, del Código de Comercio, que determina que los títulos de crédito como el pagaré tienen el carácter de ejecutivos, es decir, traen aparejada ejecución, por lo que constituyen una prueba preconstituida de la acción ejercitada en el juicio, lo que jurídicamente significa que el documento ejecutivo exhibido por la parte actora es

un elemento demostrativo en sí mismo, por lo que dicho documento a criterio de la suscrita hace prueba plena en términos del artículo 1296 del Código de Comercio, en consecuencia, debemos entender que el documento base exhibido por la parte actora, probó plenamente su acción, correspondiéndole entonces a la parte demandada desvirtuar la presunción legal que existe a favor de su contrario, en términos del artículo 1196 del Código de Comercio, lo que sucedió parcialmente en la especie, ya que la parte demandada en juicio, al momento de dar contestación a la demanda incoada en su contra opuso, de entre otras excepciones, la excepción de pago, exhibiendo billete de depósito número V00000, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financiero, S.N.C., por la cantidad de tres mil pesos con cero centavos, cantidad que la parte demandada pretendía aplicar al pago de la suerte principal; sin embargo, la parte actora en juicio, al momento de desahogar la vista que se le dio con las excepciones y defensas opuestas por su contraparte, manifestó que dicha cantidad debía aplicarse al pago de los intereses moratorios, por tal razón, es de tomar en consideración, que el artículo 364 del Código de Comercio establece que las entregas a cuenta, cuando no resulte expresa su aplicación, se imputarán, en primer término, al pago de intereses por orden de vencimientos, y después al del capital; en consecuencia, ante dicha situación, el pago exhibido por la parte demandada en juicio debe considerarse en primer lugar a cuenta de intereses por orden de vencimiento y en caso de existir remanente a cuenta de capital; ahora bien, es de tomar en consideración, que si bien es cierto, que luego de una intelección al segundo párrafo del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que dispone que los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos, a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal; en relación con lo dispuesto por el artículo 362

del Código de Comercio, donde se establece que los deudores que demoren en el pago de sus deudas deberán satisfacer, desde el día siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el seis por ciento anual; y el artículo 78 del Código de Comercio, que dispone que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados; se puede advertir, que nuestra legislación permite a las partes la libre convención de intereses en un pagaré, esto es, no fija límite para el pacto de los mismos en caso de mora en un título de crédito, pues las partes se obligan en los términos que quisieron obligarse, permitiendo el pacto de cualquier tipo de interés sin limitación alguna; y que del texto que conforma el pagaré base de acción, también se advierte que las partes convinieron un interés moratorio del diez por ciento mensual; lo cierto resulta también, que el contenido normativo de los preceptos antes mencionados, debe interpretarse acorde con las normas constitucionales y las normas de derechos humanos de fuente internacional de los que el Estado mexicano sea parte, esto es, para el caso que nos ocupa, en el sentido de que la permisión de acordar intereses no es ilimitada, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo, ya que, de acuerdo con el actual artículo 1o. constitucional, que señala, entre otras cosas, lo siguiente:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

La normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Se puede llegar a colegir, que todas las autoridades del país, incluyendo en este caso a la suscrita, se encuentran obligadas a respetar, proteger y garantizar no solo los derechos humanos que derivan de la Constitución, sino también aquellos que se encuentren contenidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, lo que conlleva a considerar que en materia de derechos humanos existe control difuso y, por lo tanto, la obligación de aplicar en materia de derechos humanos, tanto la Constitución, como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, generando la obligación de la suscrita, en su carácter de juzgadora, de vigilar la correcta aplicación de dichos derechos humanos en los casos sometidos a su consideración, utilizando, en caso de haber contradicción en la ley, la interpretación más favorable, lo que se conoce como principio *pro persona*; la suscrita apoya su criterio en el siguiente criterio aislado emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: décima época, Registro: 160589, Instancia: Pleno, tesis aislada, Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, libro III, diciembre de 2011, tomo 1, Materia(s): constitucional, Tesis: P. LXVII/2011(9a.), Página: 535:

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD *EX OFFICIO* EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad *ex officio* en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.

Por tal razón, habrá que tomar en consideración que los Estados Unidos Mexicanos firmaron la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que obliga a la suscrita a realizar un análisis del contenido del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual dispone como sigue:

ARTÍCULO 21. *Derecho a la propiedad privada*

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

Ordenamiento del cual se puede advertir que la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue firmada por el gobierno mexicano, efectivamente prohíbe, de manera expresa, la usura como forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; en ese sentido, a juicio de la suscrita, se presenta una contradicción normativa en el caso de intereses derivados de un préstamo por la suscripción de un pagaré, pues por un lado, si bien es cierto, que tanto el Código de Comercio, como la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no imponen límites a quienes suscriben un pagaré en el pacto de intereses, al señalar que las partes se obligan en la manera y términos que aparezca que quisieron obligarse, permitiendo el pacto de cualquier tipo de interés sin limitación alguna, estando al contenido del documento mismo, también cierto resulta, que tal como se señaló en líneas previas, la Convención Americana de Derechos Humanos en comento, prohíbe en forma expresa la usura, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; por tanto, atendiendo que el artículo 1o. constitucional esta-

blece el control de convencionalidad de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano; que el artículo en comento amplía el catálogo de derechos humanos no solo a los contenidos en la Constitución sino a los tratados internacionales aprobados por el Estado mexicano; que los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior; que en el caso de la usura, la Convención Americana sobre Derechos Humanos la prohíbe por considerar que se trata de una forma de explotación del hombre sobre el hombre; en consecuencia, resulta indudable para la suscrita, que en aplicación del principio *pro homine* o *pro persona*, debe priorizar la norma más favorable al demandado, siendo en este caso el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues debe considerarse que, el contenido normativo que prevé que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal, debe interpretarse conforme con la norma que prohíbe la usura como forma de explotación del hombre por el hombre, esto es, en el sentido de que la permisión de acordar intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia que resulta obligatoria para la suscrita en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, misma que se puede ver bajo el siguiente registro: Tesis: 1a./J. 46/2014 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, décima época, 2006794, Primera Sala, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 400, jurisprudencia (constitucional, civil):

PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCION DE INTERESES CON LA LI-

MITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1A./J. 132/2012 (10A.) Y DE LA TESIS AISLADA 1A. CCLXIV/2012 (10A.)]. Una nueva reflexión sobre el tema del interés usurario en la suscripción de un pagaré, conduce a esta Sala a apartarse de los criterios sostenidos en las tesis 1A./J. 132/2012 (10A.), así como 1A. CCLXIV/2012 (10A.), en virtud de que en su elaboración se equiparó el interés usurario con el interés lesivo, lo que provocó que se estimara que los requisitos procesales y sustantivos que rigen para hacer valer la lesión como vicio del consentimiento, se aplicaran también para que pudiera operar la norma constitucional consistente en que la ley debe prohibir la usura como forma de explotación del hombre por el hombre; cuando esta última se encuentra inmersa en la gama de derechos humanos respecto de los cuales el artículo 1o. constitucional ordena que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Así, resulta que el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo que se considera que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; pero además, dispone que la ley debe prohibir la usura. Por lo anterior, esta Primera Sala estima que el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactaran por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal, permite una interpretación conforme con la Constitución General y, por ende, ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisón de acordar intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; destacando que la adecuación constitucional del precepto legal indicado, no sólo permite que los gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e intereses que no sean usurarios al suscribir pagarés, sino que además, confiere al juzgador la facultad para que, al

ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré y al determinar la condena conducente (en su caso), aplique de oficio el artículo 174 indicado acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y elementos de convicción con que se cuente en cada caso, a fin de que el citado artículo no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses mediante la cual una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su contrario un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, para el caso de que el interés pactado en el pagaré, genere convicción en el juzgador de que es notoriamente excesivo y usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva, mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y motivada de las mismas circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista el juzgador al momento de resolver.

Asimismo, resulta que al realizar el análisis sobre el reclamo de los intereses pactados en un pagaré, la suscrita puede, de oficio, con base en el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, estudiar y determinar a la luz de las circunstancias particulares del caso y las constancias de autos, sin dejar de advertir los factores externos, si efectivamente los intereses moratorios establecidos por las partes resultan usurarios y por tal razón violatorios de los derechos humanos, pudiendo apartarse del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva, a fin de preservar que no ocurra el fenómeno usurario; sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia que resulta obligatoria para la suscrita en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, misma que se puede ver bajo el siguiente registro: Tesis:

1a./J. 47/2014 (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, décima época, 2006795, Primera Sala, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 402, jurisprudencia (constitucional, civil):

PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE. El párrafo segundo del citado precepto permite una interpretación conforme con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al prever que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactarán por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal; pues ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses no es ilimitada, sino que tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, el juzgador que resuelve la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré, para determinar la condena conducente (en su caso), debe aplicar de oficio el referido artículo 174, acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y los elementos de convicción con que se cuente en cada caso, para que dicho numeral no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses usurarios, por lo que si el juzgador adquiere convicción de oficio de que el pacto de intereses es notoriamente usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, entonces debe proceder, también de oficio, a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente para que no resulte excesiva, mediante la apreciación razonada, fundada y motivada, y con base en las circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista al momento de resolver. Ahora bien, cabe destacar que constituyen parámetros guía para evaluar objetivamente el carácter notoriamente excesivo de una tasa de interés –si de las constancias de actuaciones se aprecian los

elementos de convicción respectivos– los siguientes: *a)* el tipo de relación existente entre las partes; *b)* la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada; *c)* el destino o finalidad del crédito; *d)* el monto del crédito; *e)* el plazo del crédito; *f)* la existencia de garantías para el pago del crédito; *g)* las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia; *h)* la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo; *i)* las condiciones del mercado; *y, j)* otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. Lo anterior, sobre la base de que tales circunstancias puede apreciarlas el juzgador (solamente si de las constancias de actuaciones obra válidamente prueba de ellos) para aumentar o disminuir lo estricto de la calificación de una tasa como notoriamente excesiva; análisis que, además, debe complementarse con la evaluación del elemento subjetivo a partir de la apreciación sobre la existencia o no, de alguna situación de vulnerabilidad o desventaja del deudor en relación con el acreedor.

En ese sentido, es de tomar en consideración, que de conformidad con lo anteriormente señalado, para apreciar si en el caso que nos ocupa, se actualiza o no el fenómeno usurario, la suscrita, empleando el arbitrio judicial, puede tomar en cuenta las circunstancias particulares del caso, así como las constancias de actuaciones, sin dejar de advertir los factores externos y las circunstancias económicas que puedan influir en el asunto, en tal razón, debemos considerar, por un lado, que de constancias de autos que integran el asunto que nos ocupa, se puede advertir que, la parte actora en juicio reclama de su contraparte, en la vía ejecutiva mercantil, el pago de cierta cantidad de dinero, más los accesorios legales, fundando su pretensión en un pagaré, el cual se rige por el principio de literalidad contenido en el artículo 5o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y de acuerdo al texto que los conforma, se puede advertir que el mismo se suscribió entre par-

ticulares el día trece de septiembre del año dos mil trece, en el que se estableció como monto del mismo la cantidad de tres mil pesos con cero centavos, conviniendo como fecha de vencimiento el día trece de octubre del año dos mil trece, esto es, se estableció un mes como plazo para el pago del mismo, conviniendo, además, el pago de un interés moratorio a razón del diez por ciento mensual, el cual equivaldría al ciento veinte por ciento anual; por otro lado, debemos considerar también, que de la literalidad del documento en comento, no se desprende que se hubiera convenido sobre alguna garantía para el pago del crédito; del mismo modo, no se advierte el destino a la finalidad del crédito, asimismo, tampoco se puede advertir la actividad de quien otorgó el crédito; por tanto, en base a las circunstancias antes señaladas, la suscrita puede advertir que, en el caso que nos ocupa, el tipo de relación que se advierte de la suscripción del pagaré base de acción, deriva del préstamo entre particulares, de la cantidad que ampara el título de crédito base de acción, en el cual se convino que el pago debía realizarse en un plazo de un mes, estableciendo un interés moratorio a razón del diez por ciento mensual, mismo que resulta equivalente al ciento veinte por ciento anual; en tal razón, atendiendo a las circunstancias antes señaladas, habrá que tomar en consideración, que de las operaciones similares a las que se analizan, los factores externos, las circunstancias económicas y las condiciones existentes en el mercado, encontramos que, el Banco de México, en su portal de Internet, que se puede ver bajo la siguiente dirección <http://www.banxico.org.mx/sistema.financiero/publicaciones/reporte-de-tasas-de-interes-efectivas-de-tarjetas> publica diversos reportes con las tablas de interés bancario, respecto a los indicadores básicos de tarjeta de crédito, donde dicho Órgano de Gobierno presenta los indicadores básicos sobre tasas de interés y comisiones de mercado de tarjetas de crédito, con el objeto de proporcionar al público en general y a los analistas financieros elementos para comparar y

dar seguimiento al costo de dicho servicio, el cual resulta ser un hecho notorio, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento, y que puede ser invocado por la suscrita, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, en términos del artículo 1054 de la legislación en comento; sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia que resulta obligatoria para la suscrita en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, misma que se puede ver bajo el siguiente registro: Tesis: P./J. 74/2006, *Semanario Judicial de la Federación*, novena época, 174899, Pleno, tomo XXIII, junio de 2006, página 963, jurisprudencia (común):

HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.

Y la siguiente, que también resulta obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo: Tesis: XX.2o. J/24, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, novena época, 168124, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo XXIX, enero de 2009, página 2470, jurisprudencia (común):

HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada “internet”, del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular.

En ese sentido, debemos considerar que, del reporte antes señalado, que contiene datos al mes de febrero del año dos mil catorce, y que abarca el año en que se suscribió el pagaré exhibido como base de acción, se puede advertir que, en el cuadro número diez, que se puede ver en la página número quince, referente a las tarjetas de crédito “Clásicas” o equivalentes, con un límite de crédito de hasta cuatro mil quinientos pesos, para los créditos equivalentes a tres mil pesos, otorgados por diversas instituciones de crédito, *la tasa efectiva promedio ponderada* fluctuó entre treinta y uno punto dos por ciento, treinta y seis punto dos por ciento, cuarenta y uno punto seis por ciento, cuarenta y cuatro punto siete por ciento, y cuarenta y dos punto siete por ciento, asimismo, podemos advertir que el CAT (Costo Anual Total), que es un indicador del costo total de financiamiento aplicable a todo tipo de crédito con

el cual es posible comparar el costo financiero entre créditos aunque sean de plazos o periodicidades distintas e incluso de productos diferentes, que incluye el monto del crédito, intereses ordinarios, impuesto al valor agregado, comisiones, gastos, primas de seguros requeridas, amortizaciones de principal, descuentos y bonificaciones pactadas en el contrato, y cualquier otro cargo que deba pagar el cliente al momento de contratar el crédito y durante su vigencia, incluyendo la diferencia entre el precio al contado de un bien y su precio a crédito; y que se expresa como porcentaje anual, según lo establece el Banco de México, en su portal de Internet, que se puede consultar bajo la siguiente dirección: <http://www.banxico.org.mx/ayuda/temas-mas-consultados/cat--costo-anual-total-.html>, fluctuó dentro de algunas instituciones de crédito, en cuarenta y uno punto seis por ciento, cuarenta y dos punto ocho por ciento, cincuenta y siete punto ocho por ciento, cincuenta y cinco punto dos por ciento, y cincuenta y ocho punto seis por ciento; ahora bien, de acuerdo al índice inflacionario nacional, que se puede ver bajo la siguiente dirección: <http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/CalculadoraInflacion.aspx> y que refiere al aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo, se puede advertir que la variación del índice inflacionario durante la vigencia del crédito, que va desde el mes de septiembre del año dos mil trece hasta el mes de agosto del año dos mil catorce, se estableció en tres punto setenta y seis por ciento, y la tasa mensual promedio de inflación en cero punto treinta y cuatro por ciento, las cuales resultan mucho menor al pacto de los intereses convenidos; en consecuencia, la suscrita encuentra que el interés estipulado en el pagaré exhibido como base de acción, a razón del diez por ciento mensual, equivalente al ciento veinte por ciento anual, sí resulta ser notoriamente excesivo, ya que, de acuerdo a los parámetros antes señalados, el interés pactado en el título de crédito exhibido como base de

acción, excede, considerablemente, las tasas que manejan en el mercado las diferentes instituciones que otorgan algún tipo de crédito, así como el costo anual total generado por dicho producto, y el índice inflacionario antes señalado, lo que denota que hay una desproporción en el pacto de intereses, ya que supera las tasas de interés anualizadas existentes en el mercado por las diversas instituciones de crédito, lo que implica, que evidentemente dicho interés es notoriamente más alto al utilizado en el sistema financiero mexicano, por las instituciones que tiene como actividad ordinaria el préstamo de dinero; por tanto, toda vez que la permisión de acordar intereses tiene como límite que no se obtenga un interés excesivo derivado de un préstamo; que en el caso que nos ocupa, la única causa que se puede advertir de las constancias de autos que tienen pleno valor probatorio en términos del artículo 1294 del Código de Comercio, es el préstamo de una persona física a otra persona física, de la cantidad que amparan el título de crédito exhibido como base de acción; que la actividad de las partes no se encuentra regulada; que las instituciones de crédito que tienen como actividad principal el préstamo de dinero, se regulan conforme a las disposiciones de la Ley de Banco de México, en relación con la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quienes resultan irrestrictas las disposiciones contenidas en las legislaciones citadas; que de actuaciones no se desprende que quien otorgó el crédito se encuentre regulada como una institución financiera dedicada al servicio de banca y crédito, por lo que, a juicio de la suscrita resulta que para una persona que no tiene como actividad ordinaria el préstamo de dinero, también resultan irrestrictas las disposiciones contenidas en los ordenamientos señalados, y por tanto, es excesiva cualquier tasa de interés que resulte superior a las existentes y utilizadas en el mercado, por las instituciones financieras; en consecuencia, es claro que el interés estipulado en el pagaré exhibido como base de acción sí resulta ser notoriamente exce-

sivo, por tanto, el pacto de intereses de carácter usurario, a juicio de la suscrita, no puede producir obligación alguna en el deudor, por lo que, desde luego, no se encuentra obligado a cubrir los intereses convencionales pactados en el pagaré base de acción; sin embargo, es de tomar en consideración, que en el caso que nos ocupa, las partes estuvieron de acuerdo en que se cobraran intereses moratorios en el pagaré, ya que, además es una característica de las relaciones mercantiles el poder obtener una ganancia sobre el dinero, por tanto, a juicio de la suscrita, si bien no es aplicable el interés convenido en el pagaré exhibido como base de acción, sí debe existir el pago de un interés que se encuentre permitido dentro de la normatividad aplicable al caso concreto, y que se ajuste a las condiciones generales del mercado; en tal razón, a fin de que no ocurra el fenómeno usurario, esto es, que una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro, un interés excesivo derivado de un préstamo y que resulte notoriamente excesiva la tasa de interés, en relación a las circunstancias particulares que en el caso sirvieron como parámetros para tener por evidenciado el carácter usurario del interés pactado por las partes en juicio, y que para el caso de apartarse del interés convenido, la tasa de interés puede ser reducida prudencialmente a fin de que no resulte notoriamente excesiva, habrá que considerar que de entre los porcentajes antes mencionados, encontramos que la tasa media de interés equivale al cuarenta y uno punto cuarenta y seis por ciento anual, equivalente al tres punto cuarenta y cinco por ciento mensual, por tanto, dado que dicha tasa de interés no resulta notoriamente excesiva en relación a los parámetros antes señalados, la suscrita, a fin de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las partes que se encuentran contenidos en nuestra Constitución Política, como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, adecuándose al contenido constitucionalmente válido, y adoptando la interpretación más favorable al derecho humano

de propiedad, encuentra procedente condenar a la parte demandada al pago del interés moratorio a razón del cuarenta y uno punto cuarenta y seis por ciento anual, equivalente al tres punto cuarenta y cinco por ciento mensual, sobre la suerte principal.

Ahora bien, siguiendo con ese orden de ideas, para poder determinar si el pago realizado por la parte demandada debe considerarse en primer lugar a cuenta de intereses moratorios por orden de vencimiento y en caso de existir remanente a cuenta de capital, resulta necesario determinar el interés moratorio que se había causado hasta la fecha del pago, en tal razón, debemos considerar que de acuerdo con el artículo 362 del Código de Comercio, los intereses moratorios se causan desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del documento; por tanto, toda vez que los títulos de crédito se rigen por el principio de literalidad que se encuentra contenido en el artículo 5o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que implica que el universo de obligaciones y derechos creado con la expedición de un título, no puede ni debe tener otra interpretación que la realizada respecto de lo que esté contenido de manera escrita en el documento; y que en el pagaré exhibido como base de acción se estableció como fecha de vencimiento el trece de octubre del año dos mil trece, en consecuencia, se tiene que los intereses moratorios comienzan a causarse a partir del catorce del octubre de dos mil trece, por lo que, hasta el catorce de agosto del año dos mil catorce, transcurrieron un total de diez meses, un día, de mora; ahora bien, al aplicar el cuarenta y uno punto cuarenta y seis por ciento, a la cantidad de tres mil pesos con cero centavos, obtenemos un interés moratorio anual de un mil doscientos cuarenta y tres pesos con ochenta centavos.

Siguiendo con ese orden de ideas, a fin de obtener el interés moratorio mensual, debemos dividir entre doce el interés anual, lo que nos da la cantidad de ciento tres pesos con sesenta y cinco centavos, suma que al ser multiplicada por diez meses de mora, nos da la cantidad

de un mil treinta y seis pesos con cincuenta centavos; en ese mismo orden de ideas, debemos señalar que, para obtener el interés diario, debemos dividir entre treinta el interés mensual, lo que nos arroja la cantidad de tres pesos con cuarenta y cinco centavos; finalmente, al sumar los últimos dos resultados, obtenemos un total de un mil treinta y nueve pesos con noventa y cinco centavos, por concepto de intereses moratorios causados desde el catorce de octubre de dos mil trece hasta el catorce de agosto del año dos mil catorce, sin embargo, al aplicar la cantidad de tres mil pesos con cero centavos, al pago de los mismos, tenemos que dichos intereses moratorios se encuentran totalmente cubiertos, existiendo un sobrante igual a la cantidad de un mil novecientos sesenta pesos con cero cinco centavos, cantidad que al ser aplicada a la suerte principal, nos arroja un total de un mil treinta y nueve pesos con noventa y cinco centavos, por concepto de capital adeudado; por tanto, toda vez que la parte demandada adeuda una cantidad cierta, líquida y exigible, en consecuencia, se deberá condenar a la parte demandada a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de \$1,039.95 (un mil treinta y nueve pesos 95/100 M.N.), por concepto de suerte principal adeudada al veintidós de diciembre del año dos mil diez, lo que deberá hacer dentro del término de cinco días, contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, apercibida que en caso contrario, se procederá al trance y remate de los bienes embargados y con su producto se hará pago a la parte actora en juicio.

IV. No resulta del todo óbice para lo anterior, el que la parte demandada haya opuesto de su parte la excepción de pago, ya que, tal como se estableció en el considerando inmediato anterior, la misma resultó parcialmente procedente. Por lo que hace a la excepción de *sine actione agis*, es de tomar en consideración, que la misma no resulta propiamente una excepción, sino consiste en revertir la carga probatoria a su contra-

ria, y en el caso que nos ocupa, la parte actora en juicio cumplió con su carga probatoria, ya que exhibió como documento base de acción, un título de crédito de los denominados pagaré, que resulta ser una prueba preconstituida a su favor, por lo que, en este caso correspondía a la parte demandada desvirtuar la presunción legal que obra a favor de su contraria, en términos de lo establecido en el artículo 1196 de Código de Comercio, lo que sucedió parcialmente en la especie tal como quedó asentado en el considerando anterior. Por lo que hace a las excepciones personales que se advierten de los hechos que conforman el escrito de contestación de demanda, que la enjuiciada hace consistir en que el documento no lo suscribió a favor de la persona que le demanda, ni a quien le endosó el pagaré, alegando que fue al señor JUAN JOSÉ; y que le hizo entrega de la cantidad de tres mil pesos con cero centavos, al señor de nombre ANACLETO, quien se lo iba a entregar al señor JOSÉ, quien es la persona a la que le firmó en blanco el pagaré base de acción, resulta pertinente señalar que si bien es cierto, que las mismas resultarían ser de las personales que tendría el demandado en contra del beneficiario original, también resulta cierto que del análisis al endoso en propiedad que obra al reverso del pagaré exhibido como base de acción, realizado por el beneficiario original, a favor de RAÚL, ciertamente se puede advertir, que dicho endoso fue realizado con fecha doce de abril del año dos mil catorce, esto es, posteriormente a la fecha de vencimiento del título, por tanto, toda vez que el artículo 37 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dispone que el endoso posterior al vencimiento de un título de crédito surte efectos de sesión ordinaria; que en términos de lo previsto por el artículo 27 de la legislación citada, dicha circunstancia tiene el efecto de subrogar al adquirente en todos los derechos que el título le confiere y lo sujeta a todas las excepciones personales que el obligado habría podido oponer al autor de la transmisión antes de ésta; en consecuencia, en el caso que

nos ocupa, resultan oponibles las excepciones en estudio; sin embargo, es de tomar en consideración que las mismas resultan infundadas, ya que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1194 del Código de Comercio, el que afirma se encuentra obligado a probar, por lo que, el actor debe probar su acción y el demandado sus excepciones, sin embargo, durante la secuela procesal, la parte demandada se abstuvo de ofrecer elemento de prueba suficientemente eficiente a fin de acreditar su aseveración, por lo que, al no haber cumplido con la carga probatoria impuesta por el artículo 1194 previamente citado, se reitera infundada la excepción en estudio.

V. Por cuanto hace al interés moratorio reclamado por la parte actora en juicio, es de tomar en consideración, que tal como se estableció en el considerando tercero anterior, el interés moratorio convenido por las partes a razón del diez por ciento mensual, equivalente al ciento veinte por ciento anual, resulta ser notoriamente excesivo, por lo que, la parte demandada no se encuentra obligada a cubrir los intereses convencionales; sin embargo, dado que las partes estuvieron de acuerdo en que se cobraran intereses moratorios que, además, es una característica de las relaciones mercantiles el poder obtener una ganancia sobre el dinero y que, en el considerando tercero de la presente resolución, se determinó que de entre los porcentajes antes mencionados, la tasa media de interés equivale al cuarenta y uno punto cuarenta y seis por ciento anual, equivalente al tres punto cuarenta y cinco por ciento mensual, no resulta notoriamente excesiva en relación a los parámetros antes señalados, en consecuencia, la suscrita encuentra procedente condenar a la parte demandada, al pago del interés moratorio a razón del cuarenta y uno punto cuarenta y seis por ciento anual, equivalente al tres punto cuarenta y cinco por ciento mensual, sobre la suerte principal, causado a partir del quince de agosto del año dos mil catorce, y hasta el momento de realizar el pago total del capital, esto de conformidad a lo estable-

cido en el artículo 362 del Código de Comercio, así como los artículos 50. y 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cantidad que será liquidada y cuantificada en ejecución de sentencia, según lo dispone el artículo 1348 del Código de Comercio.

VI. Por encontrarse el presente asunto dentro de los supuestos previstos en la fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio, se condena a la parte demandada al pago de los gastos y costas generados por el presente juicio, por lo que los mismos deberán ser cuantificados en ejecución de sentencia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio.

Por lo anteriormente fundado y motivado, con apoyo en los artículos 1321 y 1322 del Código de Comercio, es de resolverse y se

RESUELVE:

PRIMERO. Ha sido procedente el juicio ejecutivo mercantil intentado por la actora, en donde la misma acreditó parcialmente los hechos constitutivos de sus pretensiones y la demandada acreditó parcialmente sus excepciones, en consecuencia;

SEGUNDO. Se condena a la parte demandada MARÍA DE LOS ÁNGELES, a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente la cantidad de \$1,039.95 (un mil treinta y nueve pesos 95/100 M. N.), por concepto de suerte principal, lo que deberá hacer dentro del término de cinco días, contados a partir de que la presente resolución sea legalmente ejecutable, apercibida que en caso contrario, se ordenará el trance y remate de los bienes embargados y con su producto se hará pago a la parte actora, en términos de lo establecido en el considerando tercero de esta resolución.

TERCERO. Se condena a la parte demandada a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente, el interés moratorio a razón del cuarenta y uno punto cuarenta y seis por ciento anual, equivalente al

tres punto cuarenta y cinco por ciento mensual, sobre la suerte principal, contado a partir del quince de octubre de dos mil catorce, y hasta la solución total del adeudo, de conformidad a lo establecido en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución.

CUARTO. Se condena a la parte demandada al pago de los gastos y costas causados por el presente juicio, en términos del considerando sexto de esta resolución.

QUINTO. Notifíquese y cúmplase.

Así, definitivamente juzgando lo resolvió y firma la C. Juez Vigésimo de lo Civil de Cuantía Menor, licenciada María Teresa Rincón Anaya, ante la C. Secretaria de Acuerdos, licenciada Carmen Rocío Castillo Hernández, con quien actúa, autoriza y da fe.